

Estado, mercado y desarrollo



Casi al mismo tiempo llegaron a mis manos dos estudios sobre el desarrollo. Uno, de Albert Fishlow, publicado originalmente en el *Journal of Economic Perspectives*. Otro, titulado "La tarea acuciante del desarrollo", del Banco Mundial.

El señor Fishlow, profesor de economía de Berkeley, analiza el Estado latinoamericano a través del tiempo, desde el intervencionismo de la política de susti-

tución de importaciones y de la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, que acentuaba la actividad distribucionista del Estado, hasta el liberalismo del *laissez faire*, sosteniendo que si bien ha fracasado la intervención del Estado, no son pocas las deficiencias que se producen en el mercado. Afirma que hace falta un Estado eficaz, capaz de establecer una correcta asignación de los recursos, y que el mercado no es confiable para establecer las prioridades de gastos: "la inflación es sintomática de falta de comando".

Sostiene que la situación económica de América latina obliga a tomar decisiones fuertes y también a reconocer que el Estado es demasiado débil, que debe desprenderse de actividades productivas y procurar liberalizar el comercio exterior, que hay que aumentar sus ingresos y disminuir sus gastos, que el sector público juega un papel principal en el crecimiento, que es necesario aumentar los gastos sociales en educación, salud y otros programas sociales, requeridos para afianzar la estabilidad política, pero, al mismo tiempo, regular y subsidiar correctamente, vigilar los monopolios naturales en manos privadas, controlar la actividad financiera y estimular las inversiones prioritarias.

En definitiva, dice, tanto la teoría como la práctica reservan al Estado un papel importante que reclama una nueva convergencia política: "la transformación política es componente esencial del rediseño del Estado; la democratización es sólo un comienzo".

Asevera que la oposición a las políticas eficaces ha provenido menos de los sectores populares que de la ausencia de una estructura de partidos (leales al sistema) y de la presencia de un sector privado proclive a un capitalismo sin riesgo y acostumbrado a la protección del Estado.

Por su parte, en el informe del Banco Mundial se reafirma que la cuestión esencial es "la acción recíproca entre el Estado y el mercado", que la dicotomía entre intervencionismo y *laissez faire* es falsa, que debe favorecerse la competencia interna y externa, pero que los mercados necesitan el marco regulador del Estado y que, en muchos aspectos, fracasan o son deficientes, por lo que los gobiernos deben ocuparse de la infraestructura económica y social. "No se trata de elegir entre el Estado y el mercado, sino que cada uno de ellos tiene una función importante e irremplazable que cumplir".

En varios aspectos se hace indispensable la intervención del Estado, pero éste debe estar poco dispuesto a intervenir, a no ser que se trate de medidas que el sector privado no suele adoptar, pero, cuando debe actuar, es menester que someta su intervención a la propia disciplina del mercado y hacerlo transparentemente, de acuerdo a normas preestablecidas y no discrecionalmente.

En el capítulo correspondiente al análisis de los caminos que llevan al desarrollo comienza por hacer una definición básica: "El reto que plantea el desarrollo, entendido éste en su sentido

más amplio, es el de mejorar la calidad de vida... Como mínimo, todo concepto de progreso estrictamente económico debe ir más allá del aumento del ingreso per cápita y considerar también la reducción de la pobreza y una mayor equidad, el progreso de la educación, la salud y la nutrición y la protección del medio ambiente".

Se enfatiza la obligación de los países desarrollados de permitir el acceso a sus mercados de exportaciones a los países en desarrollo: sin esta condición posiblemente de nada sirva el esfuerzo que realicen. Si lo lograran, aumentarían sus ingresos en cincuenta y cinco mil millones de dólares anuales.

Desde otro enfoque se sostiene que la experiencia demuestra que una distribución equitativa del ingreso y la riqueza amplía el apoyo necesario para llevar adelante cambios difíciles.

En cuanto a las políticas a aplicar por los países en desarrollo, aconseja que se efectúen menos controles de precios, abrir la economía, combatir el déficit público, controlar la inflación y, en primer lugar, invertir en recursos humanos, asignando mayores fondos a educación, salud, nutrición, lo que significa una mejor asignación del ingreso. Se puede transformar la perspectiva logrando que el Estado intervenga menos donde no es necesario y más donde debe hacerlo, reforzando las instituciones y favoreciendo la equidad.

En *Centesimus Annus*, Juan Pablo II, especialmente en las consideraciones sobre el papel del Estado en el sector de la economía, anticipaba estas ideas cuando sostenía que la actividad económica "no puede desenvolverse en un vacío institucional, jurídico y político" y que corresponde al Estado encauzar el respeto a los derechos humanos en el campo económico, ejecutar acciones de regulación en el mercado y "funciones de suplencia" justificadas por el bien común.

En la Argentina, imprudentemente, no se siguen estas recomendaciones o criterios, vinculados a una indispensable actividad del Estado en procura del bienestar general y a consideraciones de solidaridad social que hagan viable los esfuerzos indispensables para superar la crisis. Por el contrario, como lo hemos expresado reiteradamente, se insiste en aplicar a rajatabla el dogma neoconservador que, dicho sea de paso, en pocos años no se aceptará en ningún país, rico o pobre. Se eliminaron innecesariamente todos los proyectos sociales, se convirtió a nuestro país en uno de los más caros del mundo, se amplió la marginalidad, millones de argentinos se han empobrecido aún más, ha caído el salario real, aumentó la desocupación, se agravó seriamente el problema de los jubilados, se produjeron privatizaciones desastrosas, la producción industrial se reduce, se pierden mercados externos, el sistema impositivo es cada vez más regresivo, el campo se empobreció y se concentra la propiedad.

La situación se agrava a partir del nuevo compromiso contraído con el F.M.I. en el que el gobierno comunica su decisión de congelar los salarios durante 1991, ajustar los beneficios de seguridad social, transferir funciones a las provincias, disminuir los aportes nacionales y eliminar su participación en el impuesto a los combustibles, reducir los gastos en programas de vivienda y eliminar más de cien mil puestos de trabajo. Insistimos en la necesidad de realizar un esfuerzo mayúsculo para superar la crisis, pero se hace necesario llevarlo a cabo con el impulso de todos, y yo no tengo dudas de que sin mostrar la equidad del sacrificio no se logrará la comprensión y el acompañamiento de las grandes mayorías. Este es el rumbo que queremos corregir.